R-DJ-078-2010

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Jurídica. San José, a las nueve horas del primero de marzo de dos mil diez-----

Recursos de objeción al cartel interpuesto por Lizeth Álvarez Salas y Juan Luis Vargas Vargas, en contra del cartel de la **Licitación Pública 2010LN-000001-01** promovida por el Banco Crédito Agrícola de Cartago, para la contratación de profesionales en derecho para que brinden servicios como notarios externos en los puntos comerciales de Liberia, Pérez Zeledón, Guápiles y San Carlos.-----

I. POR CUANTO: Los objetantes presentaron sus recursos el pasado 15 de febrero.-----

II. POR CUANTO: Mediante autos de las 15 horas del 16 de febrero de 2010, se confirió audiencia especial a la Administración con respecto a los recursos interpuestos.-----

III. POR CUANTO: La Administración atendió la audiencia conferida.-----

IV.-POR CUANTO: Los artículos 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) regulan en general lo requisitos de interposición del recurso de objeción al cartel, definiendo las reglas desde la perspectiva de procedimiento y plazo, entre otros. Así entonces, en el caso del plazo tenemos que por disposición legal y luego reglamentaria (artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), el recurso debe interponerse dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas y dentro de las horas hábiles del Despacho (artículo 165 párrafo tercero del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa). A su vez, el numeral 171 de ese mismo cuerpo reglamentario dispone que contra las modificaciones o adiciones del cartel se pueden interponer recurso de objeción dentro del primer tercio del plazo que medie entre la publicación o comunicación de la variante del cartel y la fecha señalada para recibir ofertas. Agrega, que cuando la modificación consista únicamente en la prórroga del plazo para presentar ofertas, el plazo para ofertar se obtiene de la sumatoria del plazo inicial, más el plazo de la prórroga. En el concurso de cita, la invitación a participar se publicó en el Diario Oficial La Gaceta No. 7 del 12 de enero de 2010, y se fijó como fecha de apertura el 3 de febrero. Posteriormente, en La Gaceta número 28 del 10 de febrero de 2010, se publicó un aviso en que se indicaba que el cartel había sufrido modificaciones y se señaló como nueva fecha de apertura el 23 de febrero. Con base en lo anterior, se concluye lo siguiente: el plazo total para ofertar es de 30 días (contados desde el día siguiente de la invitación a participar, más la última prórroga, sea 23 de febrero). De esa forma, el tercio del plazo para recibir ofertas era de 10 días, por lo que vencía el pasado 26 de enero a las 4:00 p.m. que es la hora de cierre de labores de esta Contraloría General. Ahora bien, en este concurso se publicó un aviso en que se informaba de varias modificaciones al pliego de condiciones. Tal y como se dijo líneas atrás, el plazo para objetar éstas se computa desde el día siguiente de la publicación hasta el día de apertura. En ese sentido, la publicación de las variaciones fue comunicada el pasado 10 de febrero. Tomando en cuenta que el 23 de

febrero se fijó como fecha de apertura, ese plazo para ofertar era de 9 días. De esta forma, el tercio de ese término a efectos de objetar era de 3 días, por lo que vencía el pasado 15 de febrero. -----

V. POR CUANTO. LEGITIMACIÓN DE LA OBJETANTE LIZETH ÁLVAREZ SALAS. El artículo 82 de la LCA dispone que *“Podrá interponer el recurso de objeción todo oferente potencial o su representante, (...)”*. Una disposición similar se encuentra regulada en el artículo 171 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). En el caso bajo estudio y tal y como lo indica la Administración licitante, los profesionales a contratar es para que brinden servicios como notarios externos en los puntos comerciales de Liberia, Guápiles, Pérez Zeledón y San Carlos. A su vez, se indica en el pliego de condiciones, que el oferente debe tener oficina abierta al público dentro del perímetro de la localidad en donde se desarrollará la actividad notarial a contratar. Entendiendo el perímetro, como la distancia de 15 kilómetros con un porcentaje de tolerancia del 25% en zona urbana y 20 kilómetros con un porcentaje de tolerancia de 25% en zona rural, a la redonda del punto comercial del Banco (véase cláusula 6, de “Especificaciones del servicio”). El Banco Crédito Agrícola, al contestar la audiencia especial conferida, señala que al hacer una verificación en la página web del Colegio de Abogados, se evidencia que la oficina de dicha profesional se encuentra en San José (Barrio Luján, de Casa Matute Gómez, 100 metros sur y 75 oeste), por lo que no estaría cumpliendo un requisito básico para concursar, que es tener su oficina abierta en las cercanías de las agencias comerciales que se licitan en este concurso. Sin embargo, este órgano contralor desconoce si la señora Álvarez tiene previsto abrir una oficina en alguno de esos sitios próximamente, por lo que al momento de ofertar podría estar cumpliendo con el requisito cartelario. Véase que el cartel no establece un mínimo de tiempo de tener oficina abierta en dichos lugares. Así las cosas, y en aplicación del principio pro accione, se admite el recurso para su respectivo estudio.-----

VI. POR CUANTO. Sobre el fondo de los recursos. 1) Recurso interpuesto por Lizeth Álvarez Salas.

A) Experiencia mínima. Punto II.9 del cartel. Manifiesta la objetante que el pliego de condiciones estableció como requerimiento una certificación emitida por el Colegio de Abogados, en que se haga constar que el oferente no ha sido suspendido en el ejercicio de la profesión de la abogacía. Dicho requerimiento se objeta ya que la contratación es para profesionales en notariado. Indica, que si bien se requiere ser abogado para ejercer el notariado, la solicitud pierde relevancia por el objeto de la contratación. Agrega, que si la suspensión no es actual, pierde sentido sancionar colateralmente al notario que en la actualidad sí está habilitado para el ejercicio de la notaría. Señala que no se le asigna ninguna valoración a la suspensión en el ejercicio de la abogacía ya cumplida o actual. Indica, que tal disposición es sancionar dos veces por la misma causa, algo que ya está cumplido, sometiendo de forma odiosa e innecesaria al profesional. Por su parte **la Administración:** indica que de la lectura de la modificación

realizada por el Banco al cartel, se desprende que el citado punto, únicamente se modifica en el sentido de variar el requisito de presentar certificación de la Dirección de Notariado a una declaración jurada emitida por el profesional, por lo que se considera improcedente por estar consolidada dicha cláusula (preclusión procesal). Además, de conformidad con el artículo 148 del Código Notarial, una suspensión en el ejercicio de la abogacía, afecta accesoriamente el ejercicio del notariado, tal y como lo ha señalado la Dirección Nacional de Notariado en la resolución RES: 200°-01399 del 23 de octubre de 2000. **Criterio del Despacho.** Mediante R-DJ-039-2010 del 1 de febrero de 2010, en relación con este punto, un objetante cuestionó, el requerimiento cartelario de que la certificación tenía que haber sido emitida por la Dirección de Notariado. El Banco Crédito se allanó en este punto, a efecto de que la experiencia también podía ser demostrada por declaración jurada. Como se puede observar, el punto específico cuestionado por la objetante no fue modificado, por lo que para efectos de determinar su procedencia en este momento procesal debemos acudir a los plazos indicados en el “Por cuanto IV”, en que se estableció que el plazo para interponer objeciones a aspectos no variados del cartel original venció el pasado 26 de enero. Siendo que la recurrente presentó su recurso el 15 de febrero, el mismo se encuentra extemporáneo en cuanto a este aspecto y por ende procede **rechazar de plano.** **B) Certificación CCSS.** La señora Álvarez señala que el cartel solicita una certificación original emitida por la CCSS, en la que se haga constar que el oferente está inscrito como patrono y al día en el pago de cuotas. No obstante, considera que los artículos 3 y 4 de la Ley Constitutiva de la CCSS y el Reglamento de Afiliación de Trabajadores Independientes, permite que el oferente que preste servicios profesionales, esté inscrito como trabajador independiente, por lo que debe modificarse ese ítem, para que se permita las dos modalidades. **La Administración:** señala que dicho aspecto no fue modificado por el Banco, por lo que aplica el principio de preclusión procesal, conforme el artículo 171 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. **Criterio del Despacho:** este punto del recurso no fue ni cuestionado en la anterior gestión, ni modificado por la Administración licitante, por lo que aplica lo dicho en el punto a) del recurso de la señora Álvarez, y procede **rechazar de plano** por extemporáneo. **C) Parámetros de evaluación. Número de protocolos completos y entregados.** Indica **la objetante** que llama la atención y se ignoran las razones por las cuales el Banco le asigna un mayor puntaje a cada tomo de protocolo entregado, sin explicar por qué ello es importante. Señala, que la percepción de que más tomos, más experiencia, no demuestra nada con base en los siguientes supuestos: se gastaron protocolos otorgando escrituras válidas, escrituras con “no corre”, escrituras anuladas o duplicadas. También se pudieron gastar protocolos sobre-escribiendo escrituras que ameritaron su reproducción total o parcial en los folios inmediatos siguientes, o en la razón de cierre del protocolo, por errores de impresión que ameritaron imprimir la misma escritura más de una vez, por utilizar letra y tamaño grande que permite que escrituras pequeñas abarquen varios folios como si fueran

complejas, por dejar hojas en blanco o espacios grandes entre cada escritura, por cese voluntario, inhabilitación o suspensión temporal. Además, unos se pudieron gastar más rápido que otros porque tenían 100 hojas y se escribía a mano, y en la actualidad los tomos son de 200 hojas. Aunado a ello, un protocolo se puede llenar sólo con matrimonios, testamentos, declaraciones juradas, compraventas de carros, que no implica que el notario tenga experiencia en el área que requiere el Banco. Agrega, que si bien en la Resolución R-DJ-039-2010 del 1 de febrero de 2010, este órgano contralor resolvió sobre dicho asunto, y se consideró que el objetante no se encontraba legitimado, por tener depositados los tomos solicitados, sostiene que ella sí se encuentra legitimada, por lo que no estaría precluido en esta oportunidad. Indica, que el Banco debería analizar la razón de cierre de cada uno de los protocolos, para así constatar cuáles de las escrituras constituyen actos jurídicos válidos, cuáles no y por qué, qué tipo o naturaleza de actos o contratos debe considerarse adecuados para los propósitos del Banco. Alega, que la redacción actual puede favorecer a notarios que se equivocan en el uso de sus tomos de protocolos, o que gasten su protocolo en lo que no es válidamente aceptable o puntuable, premiando el Banco incluso la falta de deber de cuidado cartular, más que los errores propiamente humanos, normales y razonablemente permisibles. Por ello, sugiere se tome en cuenta dichas razones. Además, sugiere la división de tal puntaje y que se agregue a la valoración, otro ítem relacionado con la elaboración de escrituras referidas a la actividad de la formalización de créditos. **La Administración:** señala que dicho punto no se varió por lo que se aplica el principio de preclusión procesal. **Criterio del Despacho:** en relación con el tema de los protocolos, esta Contraloría General resolvió en la resolución R-DJ-039-2010 *“En cuanto al cuestionamiento sobre los protocolos, el objetante no ha logrado demostrar cómo tal aspecto limita su participación, e incluso según lo argumenta el Banco, ante consulta realizada al Archivo Nacional, el señor Herrero tiene la cantidad de protocolos suficientes para obtener el puntaje total. Así las cosas, y **de frente al caso particular se declara sin lugar el recurso** en este aspecto, toda vez que el recurrente no señala cómo tal aspecto limita su participación y más bien la Administración hace ver que el objetante ha depositado ocho protocolos, con lo cual se estaría cumpliendo sobradamente el requisito cartelario”*. Al respecto debemos indicar que si bien la declaratoria de “sin lugar” fue de frente al caso particular, lo cierto es que el cuestionamiento de la señora Álvarez Salas, resulta extemporáneo. En vista que tal disposición no fue modificada, la objeción debía interponerse a más tardar el pasado 26 de enero, y se hizo hasta el 15 de febrero, de allí que procede **rechazar por extemporáneo** este punto del recurso. **D) Parámetro de evaluación. Cursos de actualización o postgrado en derecho notarial.** Indica **la objetante** que el cartel original establecía dos aspectos que eran puntuables: tener la especialidad en derecho notarial y cursos de actualización. Sin embargo, con la modificación al pliego de condiciones, se excluyó la especialidad. Considera que no debe sacrificarse esa puntuación en cualquiera de sus dos modalidades (especialidad o

cursos), por cuanto es deseable contar con profesionales que estén lo mejor capacitados como notarios. Indica, que eliminar la especialidad como aspecto puntuable va en detrimento de los intereses del Banco. Manifiesta que aquel que no haya cursado especialidad porque no se requería, podrá obtener puntos por los cursos de actualización. Además, objeta que se otorgue sólo un punto por cada certificado y curso de actualización, ya que en el mercado no se imparten tantos cursos en materia notarial, o se imparten en períodos simultáneos. Asimismo, indica que si la cantidad mínima es de 4 horas en cursos de participación y 3 de aprovechamiento, ante la escasez de cursos, los puntos deberían asignarse por la cantidad de horas recibidas, y no de cursos. Señala, que los cursos deben ser impartidos por entidades que no tengan interés directo en la contratación. **La Administración:** indica se hicieron las modificaciones, a efectos de no crear inconsistencias al momento de calificar las ofertas, por lo que se decide ponderar la capacitación en Derecho Notarial, asignando puntos únicamente a cursos de actualización en la materia, en un periodo que se considera razonable, y permite a la Administración premiar a los profesionales que han sido constantes en la actualización del Derecho Notarial. **Criterio del Despacho:** El artículo 170 del RLCA, entre otras cosas, señala: *“El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración”*, de donde deriva que es necesario que quien pretende que se modifique un pliego cartelario aporte los fundamentos suficientes para llevar al convencimiento que, efectivamente, se debe proceder con la enmienda pretendida. En este sentido, conviene citar lo indicado por esta Contraloría General en la resolución No. R-DCA-092-2009 de las 9:00 horas del 26 de febrero de 2009, donde se indicó: *“...el gestionante se encuentra en la obligación de fundamentar sus alegatos, no basta simplemente con manifestar que los requisitos de admisibilidad y el sistema de evaluación le limitan su participación, sino que debe acreditar que ellos son factores que no aportan ninguna ventaja o provecho a la Administración, y que estos resultan arbitrarios. Al respecto, en la resolución R-DCA-577-2008 de 29 de octubre del 2008, se indicó: “De conformidad con lo anterior, este Despacho procederá a rechazar el recurso en cuyos extremos no se acrediten adecuadamente las razones por las cuales solicita la modificación del pliego cartelario. En ese sentido, no resulta suficiente con que el objetante motive su pretensión únicamente en que se permita la participación del equipo o sistema que pretende ofrecer. Contrariamente, debería incluirse una adecuada relación entre las modificaciones solicitadas, la documentación o prueba aportada y las violaciones imputadas al cartel. De manera tal, que no solo se demuestre la calidad y eficiencia del equipo o sistema que se pretende ofertar, sino que también se demuestre que cumple a cabalidad con los requerimientos y necesidades de la administración a efectos de satisfacer el interés público.”* Así las cosas, siendo que la objetante no demuestra cómo tal disposición limita su participación, y tomando en cuenta lo dicho por esta Contraloría General en la

Resolución R-DJ-039-2010, además de que el sistema de evaluación se encuentra dentro del ámbito discrecional de la Administración, sin que se argumenten razones de desproporcionalidad en su contra, procede **declarar sin lugar** el recurso en este punto. **E) Consideraciones generales para la valoración de las ofertas. Empate.** La objetante, considera que el método para el desempate es muy complejo, por lo que sugiere otra metodología, particularmente la establecida por el Banco Nacional: rifa entre los empatados. **La Administración:** señala que al no haberse modificado este aparte del cartel, aplica la preclusión procesal. **Criterio del Despacho:** este punto del cartel no fue modificado, por lo que el plazo para interponer recurso de objeción venció el 26 de enero anterior. Siendo ello así, procede **rechazar de plano** el recurso en este punto. **2) Juan Luis Vargas Vargas. Parámetros de evaluación. Cursos de actualización o postgrado.** Indica **el objetante**, que en una ocasión anterior, cuando salió por primera vez este cartel, interpuso un recurso de objeción contra los parámetros de evaluación establecidos en el aparte 45 del pliego de condiciones. Manifiesta, que el órgano contralor lo declaró con lugar, por lo que la Administración debía modificar el cuadro de calificación incluido en ese punto. Sin embargo, alega que el Banco no efectuó ninguna variación por lo que no se acató lo dispuesto por la Contraloría General. Indica, que además se incluyó otro cuadro al final, que lejos de resolver el problema, lo agravó, pues la modificación introducida en el cartel, resulta contradictoria, confusa e ilegal. Respecto de este último punto, manifiesta que se incluyó como parámetro: capacitaciones en cursos de actualización en derecho notarial o registral en los últimos 10 años, otorgándose un punto por cada título o certificado acreditado, hasta un máximo de 20 puntos. Señala, que la cláusula 45 otorga en un primer momento una calificación de 10 puntos a quien no acredite una especialidad en derecho notarial, pero inmediatamente se introduce un nuevo cuadro con valor de 20 puntos, para aquellos oferentes que acrediten capacitaciones en cursos de actualización en derecho notarial o registral durante los últimos 10 años. Indica, que ambos parámetros regulan lo mismo pues piden el mismo requisito, pero en uno se califica con 10 y otro con 20. Agrega, que la modificación introducida en el pliego de condiciones, además de resultar confusa y contradictoria, no resuelve el problema de fondo de su anterior objeción declarada con lugar, ya que se está pidiendo un grado académico de maestría, del que no se regula en el Código Notarial. Señala, que si lo que la Administración pretende es establecer un diferencia de puntaje entre quienes demuestren haber cursado y aprobado un postgrado o especialidad, como requisito de inscripción para el ejercicio de la función notarial, en comparación con quienes se ha incorporado con el grado académico de licenciatura, tal diferenciación de puntaje sería discriminatoria y violatoria del principio de igualdad. Ello en virtud, de que no constituye un requisito adicional o diferente entre ellas, sino que en términos jurídicos son iguales, por lo que no debe tener diferencia de puntajes unos y otros. Indica, que antes de 1998, el requisito para incorporarse como notario era tener el grado de licenciatura, después de ese año, el requisito pasó a ser la

especialidad, por lo que ambos tienen el mismo efecto, que es de cumplir como requisito académico mínimo legal para el ejercicio del notariado. Ello no quiere decir que los requisitos establecidos en el Código Notarial tengan una condición o calificación mayor o diferente a la que tuvo en su momento la licenciatura, por lo que no debe existir diferencia de puntajes. Alega, que tal aspecto, fue declarado con lugar, y la Administración no lo atendió. Manifiesta que este punto del cartel debe ser eliminado, ya que lo solicitado no concuerda con lo dispuesto en los artículos 3 inciso c) y 10 inciso b) del Código Notarial. Además, es contrario al artículo 33 de la Constitución Política y 5 de la Ley de Contratación Administrativa, hacer diferencias entre quienes tienen el grado de licenciatura, especialidad y posgrado como requisito mínimo legal, para incorporarse como abogado. **La Administración** considera que existe, por parte del objetante, una inadecuada lectura en relación con las modificaciones que se realizaron a la cláusula 45 del pliego de condiciones, pues no es cierto que no se observara lo resuelto por la Contraloría General. Manifiesta, que el Banco procedió a modificar sustancialmente dicho punto, eliminando el tema de postgrado, maestría o especialidad en Derecho Notarial, limitándose únicamente a la acreditación de cursos, con lo cual los oferentes obtendrían un punto por cada uno de los cursos acreditados. Señala, que de esta forma no se crea desigualdad y no se otorga ventajas indebidas. Además, con la solicitud de cursos de actualización, el Banco se asegura que el profesional que obtenga la mayor puntuación es porque se ha mantenido constante en el refrescamiento y preparación, conocimientos que minimizan los riesgos que se pueden presentar en este tipo de materias. El Banco busca brindar a los clientes un servicio eficiente y eficaz, con el fin de competir en el mercado bancario que cada vez es más exigente. De esta forma, solicita se rechace dicho alegato, tomando en consideración que se atendieron las sugerencias realizadas por la Contraloría General. **Criterio del Despacho:** Efectivamente, el punto cuestionado fue modificado y el recurso de objeción fue presentado en tiempo, de allí que se entre a analizar el alegato. El cartel original disponía que los oferentes que acreditaran haber cursado el grado de maestría en derecho notarial y registral, a que aluden los artículos 3 inciso c) y 10 inciso b) del Código Notarial (Ley No. 7764), obtendrían 20 puntos. Sin embargo el señor Vargas Vargas, objetó tal disposición, y este órgano contralor lo declaró con lugar y en la resolución R-DJ-039-2010, dijo: *“Al respecto, es importante tener presente que con anterioridad a la entrada del actual Código Notarial, para el ejercicio de la actividad notarial, se requería únicamente ser licenciado en derecho. Actualmente el artículo 3 inciso c) del citado código estipula como un requisito para ejercer el notariado “Ser licenciado en Derecho, con el postgrado en Derecho Notarial y Registral, graduado de una universidad reconocida por las autoridades educativas competentes; además haber estado incorporado al Colegio de Abogados de Costa Rica al menos durante dos años y, con la misma antelación, haber solicitado la habilitación para ejercer el cargo”.* Como se puede observar, en la actualidad, el postgrado es un requisito necesario para el ejercicio de la actividad notarial, es decir es un requisito

de admisibilidad, que en modo alguno puede ser considerado dentro de los factores de evaluación. De allí, que aunque el sistema de valoración se encuentra dentro del ámbito discrecional de la Administración, lleva razón el recurrente, en el sentido que la entidad bancaria no puede otorgar puntos por un requisito necesario para participar, de modo que resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que dispone: “No podrán ser ponderados como factores de evaluación los requisitos mínimos legales, técnicos o financieros, que resulten indispensables para la contratación.”. Por lo tanto, riñe con la disposición antes indicada el hecho que se consigne en el sistema de calificación el contar con la especialidad exigida en el Código Notarial. Incluso, la estipulación de otorgar 10 puntos a aquellos oferentes que no acrediten especialidad, presenta un problema, ya que no sólo se hace nuevamente la distinción de los que tiene una especialidad (sin importar si es por requerimiento de ley o no), sino que además, no toma en cuenta que los que la tienen, les puedan ser reconocidos cursos de actualización, los cuales igualmente son muy importantes en esta actividad. En ese sentido, se **declara con lugar** el recurso. Ahora, el Banco remite una nueva propuesta de evaluación, sin embargo, y sin ánimo de agotar el tema, ante eventuales recursos de objeción, este órgano contralor considera que los puntos relacionados con la maestría en derecho notarial y la especialidad antes del 2003, presenta la misma inconsistencia pero de forma inversa. En esta oportunidad se pretende otorgar puntaje a la especialidad obtenida antes del 2003, pero los que deban tenerla con posterioridad a dicha fecha no podrán tener puntos, precisamente porque es un aspecto necesario para su ejercicio, lo cual podría estar creando un trato desigual. En resumen, el sistema de evaluación debe estructurarse de tal forma que no se consignen requisitos de admisibilidad ni se otorgue ventajas indebidas entre los participantes. Por otro lado este sistema de calificación debe resultar lo más claro posible a efectos de minimizar las interpretaciones. Esto se apunta en razón de que por posgrado puede entenderse desde una especialidad, maestría o doctorado.” Véase entonces que no puede establecerse como un parámetro a evaluar, un aspecto de admisibilidad, en este caso, tener un determinado grado académico para poder ejercer la profesión y por ende poder brindar servicios. El objetante argumenta, que a pesar de que este órgano contralor declaró con lugar el recurso, lo cierto es que el Banco no procedió a efectuar las modificaciones correspondientes y se mantiene la problemática original. Por su parte, la Administración licitante sostiene que procedió a efectuar los cambios conforme lo resuelto por esta Contraloría General. Efectivamente el punto 45 del pliego de condiciones fue variado sustancialmente. Comparte este órgano contralor que quizá el objetante esté efectuando una lectura incorrecta de la modificación. Al respecto es importante percatarse que el cartel incluye primero, la cláusula original sin modificación y luego indica: “Modificado mediante publicación en La Gaceta No.28 del día 10 de febrero de 2010, para que se lea correctamente de la siguiente manera: / Capacitaciones en Derecho Notarial (20 puntos)” y de seguido

pone el nuevo cuadro de esa ponderación. Con ello, es claro que la cláusula fue modificada en su totalidad y únicamente se otorgarán puntos a los oferentes que acrediten capacitaciones en cursos de actualización en Derecho Notarial o registral de los últimos 10 años. En ese sentido, no se hace referencia a postgrado o especialidad alguna. Bajo esa línea de ideas, y siendo que el objetante, no ha demostrado cómo esta nueva disposición viene a limitar su participación procede **declarar sin lugar** este punto del recurso. Es importante eso sí que el Banco tenga presente que dichos cursos en modo alguno pueden referirse a aquellos cursos o especialidades necesarias para el ejercicio del notariado. Ahora bien, para efectos de evitar confusiones en la lectura del cartel, como lo ocurrido con el señor Vargas, y por seguridad jurídica, el Banco debe tener un único cartel consolidado, que incluya todas las modificaciones que se hubieran realizado al mismo, tal y como lo regula el artículo 10 inciso e) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.-----

POR TANTO

Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182 y siguientes de la Constitución Política; 81, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa y 170, 171 y 172 de su Reglamento General **se resuelve: 1) Rechazar de plano el recurso interpuesto por Lizeth Álvarez Salas y declarar sin lugar el del señor Juan Luis Vargas Vargas**, en contra del cartel de la Licitación Pública 2010LN-000001-01 promovida por el Banco Crédito Agrícola de Cartago, para la contratación de profesionales en derecho para que brinden servicios como notarios externos en los puntos comerciales de Liberia, Pérez Zeledón, Guápiles y San Carlos- -----

NOTIFÍQUESE.-----

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol
Gerente Asociada

Licda Lucía Gólcher Beirute
Fiscalizadora

LGB/mgs

NN: 01966 (DJ-0767-2010)

NI: 3133, 3143, 3797

G: 2010000321-2